

BCV Y AUTOCRACIA

TAL CUAL, Lunes 12 de Abril 2010

Econ. Isaac Mencía

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada en diciembre de 1999, definió claramente el objetivo fundamental del BCV: lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria (art.318). Consistente con este objetivo, la Constitución consagró la Autonomía del BCV en el ejercicio de sus funciones, estableciendo que el ente emisor no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias (art.320).

Sin embargo, desde el año 1999 hasta la presente fecha, la Ley del BCV ha sido reformada en tres (3) oportunidades (2001, 2005 y 2009) y a menos de 5 meses de la última reforma la Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves 8 de abril de 2010, la cuarta modificación a la Ley que rige a esta institución.

BCV y Financiamiento de la Revolución

Ante las numerosas reformas a la Ley del BCV, abiertamente violatorias de la Constitución Nacional, es pertinente formularse la siguiente pregunta: ¿Es compatible la autonomía y la misión del BCV de procurar la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la moneda, con la política de concentración de poder político y económico en el Ejecutivo Nacional, lo cual demanda un gasto público creciente para desarrollar políticas populistas y estatizar los medios de producción y distribución de la economía?.

Los hechos evidencian en once años de gobierno, que el proyecto político del “Socialismo del Siglo XXI”, es contrario a todo esquema institucional de separación de poderes, descentralización, libertad económica, y autonomía funcional y administrativa como la otorgada por la Constitución al BCV. La autonomía y misión que debe cumplir este instituto y la prohibición expresa de financiar déficit fiscales del gobierno, plantea claramente una contradicción irresoluble con la naturaleza y la dinámica del proyecto político que impulsa el Presidente Chávez, el cual tiene dos ejes fundamentales: Construir un Estado y una economía socialista con la promesa de alcanzar por esa vía la justicia social; y promover y exportar dicho proyecto a otros países del continente para derrotar la hegemonía norteamericana en la región.

La ejecución de este ambicioso proyecto político que tiene como mentor fundamental al régimen cubano, demanda recursos financieros ilimitados por cuanto, en la práctica, el gobierno debe financiar no sólo un presupuesto de gasto interno, sino también uno externo (léase donaciones e inversiones en los países del ALBA, PETROCARIBE, alianza con gobiernos de la región como Brasil, Argentina y otros, basados hasta ahora en un intercambio comercial favorable a dichos países...). Dada la magnitud y complejidad de los problemas económicos y sociales acumulados en Venezuela,

agravados por la ineficiente gestión del gobierno y su política de dismantelar el aparato productivo privado, unido a los gastos externos, los cuantiosos ingresos petroleros recibidos por el gobierno, particularmente, en el quinquenio 2004-2008, han sido insuficientes para financiar un gasto público voraz sin el cual la revolución no podría impulsarse y menos aún mantenerse. A título ilustrativo, cabe señalar, que solo el gasto del Gobierno Central (no incluye los gastos del Fondo de desarrollo económico y social y tampoco los gastos sociales de PDVSA) pasó de representar un 21,4% del PIB en 1998, a 26,6% del PIB en el mencionado quinquenio, lo que se traduce en un incremento del gasto fiscal de 24,3%, en términos reales.

Para superar estas restricciones financieras y no detener la marcha de la revolución, el gobierno ha apelado no sólo a un incremento sustancial del endeudamiento público (en once años el gobierno incrementó la deuda total en 115,5%, con respecto a 1998), sino también a sucesivas reformas de la Ley del BCV, con la finalidad de arbitrar mecanismos de financiamiento monetario del gasto fiscal y, del consiguiente déficit generado por el mismo. Esta y no otra es la razón de fondo que explica las repetidas modificaciones a la ley que rige al ente emisor. La estrategia ha consistido en ir modificando progresivamente la Ley del BCV de acuerdo a los requerimientos de recursos del gobierno. Primero fue la reforma de 2001, mediante la cual se estableció que la entrega de utilidades cambiarias al gobierno no sería anualmente sino semestralmente; luego, en la reforma de 2005, de cara a las elecciones presidenciales convocadas para diciembre de 2006, se realizó una modificación más profunda, destacando la del artículo 113, mediante la cual PDVSA ya no estaría obligada a vender al BCV el total de las divisas provenientes de la actividad petrolera, sino aquellas requeridas para el gasto operativo y de funcionamiento interno y para el pago de sus contribuciones fiscales, con lo cual quedaría un remanente de divisas que deducidos los pagos operativos y de inversión en el exterior, sería transferido a un fondo (FONDEN), manejado discrecionalmente por el gobierno para financiar gasto público, entre otros usos, creándose así un presupuesto paralelo no aprobado por el poder legislativo.

En esta misma reforma (2005), se aprobó la transferencia de reservas internacionales (6000 millones de dólares) sin contrapartida en bolívares, del BCV al FONDEN, lo que constituyó un financiamiento directo al gobierno expresamente prohibido por la CRBV. Hasta la fecha, el BCV ha transferido más de 30 millardos de dólares al mencionado fondo. En la reforma de 2009 y la que acaba de ser aprobada, se termina de consumir la utilización del BCV como fuente de financiamiento del “Socialismo del Siglo XXI”, pues ahora dicho instituto podrá financiar directamente a PDVSA a través de la compra de títulos emitidos por la misma, a la par que se plantea, igualmente, financiar distintas actividades y proyectos económicos definidos como prioritarios por el gobierno.

La experiencia histórica demuestra que cuando los gobiernos usan el financiamiento monetario de los bancos centrales, están abriendo el camino para que se desate una hiperinflación con consecuencias devastadoras para la economía y el bienestar del pueblo. También enseña que sin instituciones económicas sólidas y creíbles es imposible alcanzar un país próspero y con justicia social.